

LA DESILUSIÓN MEXICANA. POPULISMO Y DEMOCRACIA EN MÉXICO EN EL 2006*

SOLEDAD LOAEZA

LA IZQUIERDA MEXICANA LLEGÓ A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL de 2006 unida tras grandes expectativas de triunfo, y convencida de la fuerza invencible de su líder, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En febrero de ese año las encuestas de opinión mostraban que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, CPBT (incluía al Partido de la Revolución Democrática, PRD, y a dos pequeñas organizaciones, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Convergencia, PC), que había sido jefe de gobierno de la ciudad de México hasta seis meses antes, ocupaba el primer lugar en las preferencias del electorado y estaba diez puntos por delante de sus dos principales contendientes: Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, PAN, y Roberto Madrazo del Partido Revolucionario Institucional, PRI (que se presentó en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM), el legendario partido hegemónico que había sido derrotado seis años antes.¹

Los lopezobradoristas también cifraban sus esperanzas en la gran ola de izquierda que según muchos abrazaba a América Latina. Esta visión colocaba en la misma categoría a Hugo Chávez, electo por primera vez en Venezuela en 1998, y a Luiz Inácio “Lula” da Silva, el antiguo líder sindical que fue elegido presidente en Brasil en 2002 –y reelegido en 2006, al igual que Chávez. Una definición amplia de la izquierda latinoamericana incluía las victorias en 2004 de Martín Torrijos en Panamá, de Néstor Kirchner en Argentina y de Tabaré Vázquez en Uruguay. En el primer semestre de 2006 se añadieron a esta lista los nombres del boliviano Evo Morales, del peruano Alan García y de la chilena Michelle Bachelet. Según los observadores

* Nuestro agradecimiento a la revista *Constellations*, en cuyas páginas apareció originalmente este artículo (vol. 14, núm. 3, 2007), por permitirnos incluirlo en este número de *Foro Internacional*.

¹ Dos nuevos partidos, el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PASC y el Partido Nueva Alianza, PANAL, también participaron con sus respectivos candidatos: Patricia Mercado y Roberto Campa.

más entusiastas la victoria de la izquierda en México consolidaría un giro histórico de la política latinoamericana que lanzaría un "...reto geopolítico..." a Estados Unidos (Grandin, 2006: 1).

En las elecciones mexicanas de julio de 2006 los partidos de la CPBT registraron avances impresionantes. En conjunto obtuvieron 30% del voto en el Congreso –en 2000 la Alianza por México, la coalición de partidos que encabezaba el PRD, obtuvo 19% del voto–, solamente cuatro puntos menos que el PAN, que obtuvo la mayoría, y el candidato de la CPBT al gobierno de la ciudad de México triunfó con un amplio margen frente a sus contrincantes. Sin embargo, los resultados del voto presidencial fueron una desilusión.² Según los datos preliminares, que se anunciaron tarde en la noche del día de la elección, Andrés Manuel López Obrador había obtenido el segundo lugar frente al candidato de Acción Nacional, Calderón, quien recibió 36.38% del voto, mientras que el candidato de la CPBT había recibido 35.34%. Los lopezobradoristas rechazaron estos resultados con base en diferentes denuncias de fraude, y emprendieron una movilización cuyo objetivo era invalidar la elección. La protesta poselectoral se prolongó durante casi cinco meses, hasta el día en que el presidente Calderón tomó posesión. Las cifras oficiales que había dado a conocer el Instituto Federal Electoral, IFE, en julio fueron confirmadas por el Tribunal Electoral el 5 de septiembre.

La derrota de la izquierda no fue la única desilusión que provocó la elección y los lopezobradoristas no fueron los únicos decepcionados. En términos generales, un proceso de renovación del poder que debió haber ratificado la democratización del país y la exitosa transición de un sistema de partido hegemónico al pluripartidismo con base en elecciones competitivas, limpias y justas se convirtió en una fuente de frustración, de divisionismo y de conflicto político. La protesta poselectoral puso en tela de juicio la creencia de que el sistema político mexicano había completado la transición democrática, lo cual no era del todo infundado. En julio de 2000 el candidato del PRI había aceptado la derrota frente a su adversario del PAN, Vicente Fox; al hacerlo echó por tierra las especulaciones más pesimistas que preveían el violento rechazo de los priistas a resultados desfavorables. En contraste, seis años después López Obrador se negó a aceptar los resultados oficiales y logró movilizar el apoyo de cientos de miles de seguidores. La incertidumbre que generó esta protesta fue mayor que la que naturalmente inspiró la campaña electoral.

La negativa de López Obrador a reconocer la victoria de Calderón y la movilización poselectoral fueron causa de frustración para todos aquellos

² Estos éxitos electorales incrementaron el potencial de influencia del PRD que ya gobernaba cinco estados: Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

que creían, primero, que la izquierda mexicana había renunciado en forma definitiva a estrategias antisistema, y en segundo lugar, que los valores y las instituciones de la democracia electoral habían arraigado en la cultura política mexicana y eran componente de un consenso nacional. Estas creencias fueron cuestionadas por los seguidores de AMLO que denunciaron la supuesta falta de honestidad del gobierno y de las autoridades electorales en la conducción de la elección, pero en última instancia terminaron por repudiar los procedimientos y las instituciones electorales. La protesta poselectoral encontró ecos limitados fuera de la capital de la república, aun así, muchos creyeron que la estabilidad del país estaba comprometida. Finalmente Felipe Calderón tomó posesión en una accidentada sesión del Congreso en la que los representantes del PAN protegieron al presidente entrante de sus contrapartes, miembros de la CPBT, que parecían decididos a impedir la realización de la ceremonia oficial.

Muchas de las explicaciones del ascenso de López Obrador se han concentrado en su carisma y en su capacidad para movilizar a las masas con el recurso plebiscitario que es hoy en día el rasgo dominante del populismo. Algunos han visto en el lopezobradorismo una recreación del caudillismo. Sin embargo, el éxito de AMLO es una expresión de modernidad política más que una continuidad histórica, en la medida en que significa la irrupción en la política de las masas urbanas. Este fenómeno fue alentado por las reformas electorales que se introdujeron a lo largo de más de dos décadas porque imprimieron credibilidad y eficacia al sufragio; ambas características fueron incentivos determinantes para un notable aumento de la participación. Independientemente de su derrota final, López Obrador dominó la campaña presidencial. Atrajo más de 13 millones y medio de votos, es decir, el doble de lo que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas seis años antes. El estilo personal de López Obrador puede explicar las razones inmediatas, primero, de su éxito y, luego, de su fracaso. Sin embargo, las bases de su capacidad para desafiar a la naciente democracia mexicana son más contextuales que personales.

En México, al igual que en otros países de América Latina, el ascenso de un líder proclive al plebiscitarismo más que a los mecanismos democráticos de representación y de participación ocurrió en un contexto de fragmentación social, agravado por la creciente desigualdad y la persistente pobreza, y por la debilidad institucional que caracteriza a un Estado en transición que todavía no se ha ajustado a los cambios que trajeron en forma paralela las reformas liberalizadoras y la democratización. El resurgimiento de la tentación plebiscitaria es prueba del insuficiente desarrollo de las instituciones que estructuran las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. El episodio de López Obrador puso al descubierto las debilidades de

la izquierda y sacó a la luz algunas de las contradicciones más significativas que la oponen a la tradición populista, que es un legado del régimen autoritario. Esta experiencia muestra que mientras "...los partidos socialistas sigan siendo débiles, brotes populistas se harán más frecuentes, más violentos y más problemáticos para la democracia" (Mann, 2002: 11).

Este artículo sostiene que la fuerza del llamado populista que representó López Obrador no se fundaba en sus rasgos de personalidad, sino en su capacidad para ofrecer una política alternativa que prometía integración y coherencia en una sociedad cuyas relaciones con el Estado habían sido desestabilizadas por la democratización y por las reformas liberales de los años noventa. Para alcanzar su objetivo López Obrador, por una parte, buscó recrear una estructura de autoridad personalizada –que reproducía la presidencia autoritaria– y, por otra parte, se propuso recuperar el nacionalismo revolucionario, es decir, la ideología de tonalidades socialdemócratas que se asocia a los objetivos y a las tradiciones de la Revolución mexicana. Su objetivo último era construir una organización de poder con base en redes políticas e ideológicas que cubrieran los vacíos que había dejado el Estado autoritario, y desde ahí desafiar a la nueva élite gubernamental y a un segmento de la élite económica.³

Sin embargo, la estrategia de López Obrador subestimó la influencia de ideas y valores emergentes alternativos, como los de la misma democratización, por ejemplo, la novedosa legitimidad del pluralismo político; también erró el cálculo del papel que desempeñaron instituciones renovadas, como son los partidos y las autoridades electorales, en la generación de nuevas identidades en competencia con las que estaban asociadas al régimen autoritario. Estas equivocaciones condujeron al fracaso de su campaña presidencial, así como de su estrategia de protesta. No obstante, los efectos más importantes de estos errores fueron la fragmentación y la dispersión del poder.

Para discutir esta hipótesis, el presente artículo examina, primero, el resurgimiento del populismo en México como una respuesta a las transformaciones que experimentó el Estado en las dos últimas décadas y su impacto sobre sus relaciones con la sociedad civil; la segunda parte analiza la construcción del liderazgo de López Obrador a expensas del desarrollo

³ Michael Mann distingue cuatro fuentes de poder social: política, militar, económica e ideológica. Las relaciones entre ellas son intrincadas, aunque se mantienen autónomas unas respecto de otras. A inicios del siglo XXI, el sistema político mexicano confirma los presupuestos de este enfoque: un Estado débil en una sociedad fragmentada no necesariamente propicia la concentración del poder; esta situación refuerza la dispersión del poder, *i.e.*, la autonomía de las distintas fuentes de poder. Véase Michael Mann, "The Sources of Social Power Revisited: A Response to Criticism", (2006: 343-396).

institucional del PRD; y la tercera parte mira a una movilización cuya finalidad era estructurar una comunidad política coherente alternativa, pero que desembocó en mayor fragmentación.

EL RESURGIMIENTO DEL POPULISMO EN MÉXICO

El populismo reapareció en América Latina a finales del siglo xx en la cauda de los procesos de democratización que introdujeron o reintrodujeron electorados de masas en la arena política. Este proceso ocurrió en un contexto de colapso institucional o económico caracterizado por el descrédito de la élite política y la crisis fatal de los partidos tradicionales.⁴ Los líderes y las fuerzas populistas que representan han sido agrupados con líderes de izquierda bajo la etiqueta de “la nueva izquierda latinoamericana” (Grandin, 2006), pero son más diversos de lo que parece a primera vista. Coinciden en el compromiso de combatir la pobreza y la desigualdad, así como en sus llamados a movilizaciones masivas. No obstante, sostienen posiciones muy distintas en cuanto al mantenimiento o reversión de las reformas económicas y políticas de los años noventa (Castañeda, 2006). Estos desacuerdos son únicamente la superficie y el reflejo de discrepancias más profundas con respecto a la representación y a la participación democráticas, y al liderazgo político. Asimismo, los líderes populistas eran *outsiders* de la élite política que llegaron al poder en un contexto de colapso institucional, mientras que la elección de políticos de izquierda confirmó la continuidad institucional y fue percibida como un paso más hacia la consolidación democrática. Estas variaciones claramente distinguen a populistas como Chávez y Morales, que tratan de hacer a un lado las restricciones institucio-

⁴ El populismo en América Latina es un fenómeno político recurrente que se asocia con crisis económicas o institucionales derivadas de cambios fundamentales, por ejemplo, la introducción del sufragio universal o la transición a una nueva etapa del desarrollo capitalista. La región ha sido el escenario de por lo menos tres tipos de populismo: populismo clásico, que apareció en los años treinta y cuarenta como una fórmula de integración corporativa de las masas al sistema político. Los líderes de estos episodios fueron Getulio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México y Juan Domingo Perón en Argentina. En los años setenta el populismo económico estuvo caracterizado por la expansión del gasto público y grandes déficit fiscales cuyo objetivo era preservar el *statu quo* político que desafiaban crecientes demandas redistributivas; Luis Echeverría desarrolló este modelo en México, después lo hizo Alan García en Perú durante su primer mandato presidencial. En los noventa los neopopulistas entraron a la contienda política haciendo un uso intensivo de la imagen y de la televisión; la mayoría de ellos eran *outsiders* políticos que apelaban al apoyo directo de las masas mientras implementaban reformas neoliberales y una política económica fiscalmente conservadora; los ejemplos de este tipo de política son Carlos Menem en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela (Loaeza, 2001).

nales o de transformarlas radicalmente, y a “Lula” da Silva y Bachelet cuyas políticas están diseñadas conforme a las instituciones existentes. Andrés Manuel López Obrador representa algunas de las contradicciones más notables entre el populismo y la izquierda, que se derivan del intento del líder de subordinar la lógica institucional de un gobierno o de un partido político a su autoridad personal.

Ninguna de las condiciones críticas asociadas con el ascenso del populismo estaba presente en México en la elección de 2006. La campaña presidencial y la elección se desarrollaron en un contexto de crecimiento económico mediocre pero de estabilidad macro: el déficit de la cuenta corriente era pequeño y el estado de la balanza de pagos saludable, además se redujo la deuda pública, y se mantuvo la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Las variables políticas también contribuían al desarrollo de un proceso electoral dentro de la normalidad democrática: la popularidad del presidente Fox y sus tasas mensuales de aprobación se mantuvieron altas y estables.⁵ Los mexicanos estaban tan insatisfechos como otros latinoamericanos de sus partidos políticos. En 2003 sólo 10% confiaban “mucho” o “algo” en ellos (Latinobarómetro, 2004). Sin embargo, en abril de 2006, 55% se identificaba con un partido político (Consulta Mitofsky, 2006b) y el día de la elección más de 95% del voto se concentró en los tres grandes partidos: el PAN y las dos coaliciones que encabezaban el PRD y el PRI, respectivamente.⁶

Lejos de ser un *outsider*, López Obrador era un político profesional. En los años ochenta fue presidente del PRI en su estado natal, Tabasco. En 1988 abandonó el partido oficial para unirse al grupo de disidentes que fundó el PRD. Posteriormente siguió una carrera de activista político profundamente involucrado en las redes y en las prácticas clientelares del sistema autoritario. En 1996 fue elegido presidente del PRD, de suerte que cuando llegó a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en 2000 traía consigo una carrera política muy rica, experiencia en la organización de movilizaciones, protestas callejeras y de tácticas de acción directa para presionar a las autoridades gubernamentales. López Obrador combinaba experiencia en los patrones de relación política y de organización de redes característica del sistema autoritario (Bruhn, 1998; Lajous, 2006).

El contexto inmediato de estabilidad institucional y financiera de la elección presidencial puede no haber sido favorable a un brote populista,

⁵ Desde mayo de 2003 y hasta el día de la elección la tasa de aprobación del presidente Fox osciló entre 6.8 y 7, a pesar de escándalos de corrupción que involucraban a su esposa y a los hijos de esta última, e incluso por encima de la insatisfacción general que causaba el pobre desempeño económico (Consulta Mitofsky, 2006a).

⁶ Cabe hacer notar que estas tres organizaciones ocupan el escenario político mexicano desde hace décadas. El PAN se fundó en 1939, el PRI en 1946 y el PRD, el más joven, en 1989.

pero la persistencia de la pobreza y de la desigualdad nutría el potencial para que se produjera un episodio de esta naturaleza. A ojos de muchos mexicanos, el cambio de régimen y la alternancia no habían tenido ningún efecto palpable sobre los problemas más urgentes del país. El gobierno de Vicente Fox logró ligeras mejoras en la reducción de la pobreza extrema, pero en 2006 los niveles de pobreza en México estaban apenas por debajo de los de 1994-1995. “En 2002, la mitad de la población vivía en pobreza y la quinta parte en pobreza extrema” (Banco Mundial, 2006), y desde 1988 el coeficiente de Gini –una medida de desigualdad del ingreso– se ha mantenido estable en .54. La mayor parte de los pobres carece de asistencia en caso de enfermedad, desempleo y vejez.

En México, como en otros países de América Latina, la pobreza y la desigualdad, las dos condiciones generales de la *crisis estructural perenne* de la región (Mann, 2002: 2), generan serias dudas respecto a la eficacia de las instituciones democráticas. La principal consecuencia política de esta crisis estructural es la erosión de los vínculos de solidaridad social que existían antes de los ochenta, y el debilitamiento del sentido de comunidad nacional. Andrés Manuel López Obrador ofreció reconstruir estos vínculos con base en un liderazgo personalizado, devolviendo al Estado su posición en el centro de la vida económica, política y social, y apelando a la emoción nacionalista y a los valores y mitos de la Revolución mexicana (López Obrador, 2004).⁷ Su llamado urgía a la reapropiación del Estado por el pueblo como si hubiera sido expropiado a la sociedad mexicana por los neoliberales en el poder.

Esta oferta contrastaba con el sesgo antiestatista del presidente Fox y con su renuencia a hacer del Estado el eje de la reestructuración de las relaciones con la sociedad, fundada en la convicción de que el intervencionismo estatal era la esencia del autoritarismo. Paradójicamente Fox y López Obrador compartían una desconfianza profunda hacia los partidos políticos, en los que veían un obstáculo para el establecimiento de la relación directa que aspiraban a desarrollar con la opinión pública mexicana (Loaeza, 2006b). Para ellos, los partidos políticos eran adversarios del Poder Ejecutivo, más que instrumentos para implementar decisiones y movilizar recursos. Sin embargo, el presidente Fox representaba las ideas y los valores que acompañaron el proceso de democratización. López Obrador, en cambio, recurrió al nacionalismo revolucionario como catalizador para cristalizar diversas fuerzas sociales en una lucha política que iba mucho más

⁷ López Obrador presentó su *Proyecto alternativo de nación* el 29 de agosto de 2004, casi un año antes de lanzar su candidatura a la presidencia de la república. El rasgo más sobresaliente de este documento es el papel preponderante del Estado y el número de programas de asistencia social. www.prd.org.mx 12/30/2006.

allá de la competencia electoral (Mann, 2006: 387); no ofrecía una alternativa partidista, sino todo un *Proyecto alternativo de nación*.

El atractivo de la propuesta de López Obrador se vio acrecentado por las limitaciones de un marco institucional en transición en el que las élites estatales mantienen el *poder despótico* para tomar e implementar decisiones por encima de la sociedad, sin consulta ni negociación previa. En cambio su *poder infraestructural* para coordinar la vida social ha disminuido. El Estado autoritario mexicano del siglo xx compartía algunos rasgos con la mayoría de los estados latinoamericanos. No era completamente despótico porque podía tomar decisiones haciendo a un lado a la sociedad civil, pero no tenía poder para implementar las decisiones. Esta debilidad era manifiesta en su limitada capacidad fiscal o en su incapacidad de garantizar la vigencia del Estado de derecho (Centeno, 2002). Sin embargo, el Estado autoritario mexicano tenía un poder infraestructural mayor que otros estados latinoamericanos, estaba más arraigado en la sociedad, primero, porque la experiencia revolucionaria de 1910 proporcionaba un marco de referencia para estructurar a la sociedad con el apoyo de la *ideología institucionalizada* del autoritarismo: una combinación pragmática de mitos, rituales y símbolos nacionalistas y revolucionarios que preservaban el orden social.⁸ La Revolución fue un proceso de construcción nacional que sentó las bases de una identidad nacional, aunque no fomentó el sentido de ciudadanía. Se puede parafrasear a Eugen Weber, autor de *Peasants into Frenchmen*, y afirmar que la Revolución hizo de los campesinos, mexicanos. Esta ideología, que era difundida en forma muy insistente por las agencias estatales, generaba sentimientos de solidaridad social, introducía cohesión en una sociedad muy dividida y producía una identidad política que enmascaraba las diferencias sociales.

En segundo lugar, tres instituciones estructuraban las relaciones entre Estado y sociedad en el México autoritario: un Estado altamente centralizado, una presidencia paternalista y poderosa con una marcada proclividad a manipular la ley, y el PRI, la organización multclasista subordinada al Estado que tuvo un papel crucial en la organización de la representación y de la participación políticas conforme a patrones corporatistas y clientelares.

Durante la mayor parte del siglo xx la cohesión social en México fue frágil y excluyente. Sin embargo, gracias al poder infraestructural del Estado, la estabilidad autoritaria en la segunda mitad de siglo no se basó exclu-

⁸ En su análisis del poder ideológico Michael Mann propone tres tipos de ideología: trascendente, immanente e institucionalizada. Esta última "...indica sólo una presencia mínima de poder ideológico. Es conservadora y pragmática, respalda ideas, valores, normas y ritos que sirven para preservar el orden social existente..." Michael Mann, "The sources...", *op. cit.*, p. 348.

sivamente en la coerción y en la represión, sino también en la existencia de una comunidad política, si bien ficticia, basada en el nacionalismo y en una identidad vaga construida sobre los mitos y los símbolos de la Revolución de 1910. Así, los efectos desintegradores de pronunciadas diferencias sociales se veían contrarrestados por una construcción cultural cuyos pilares centrales eran: el Estado autoritario, la ideología institucionalizada, la presidencia y el Partido de la Revolución Mexicana.

En los años ochenta el declive del poder del Estado, debido en parte a una severa crisis económica y a los primeros pasos hacia la apertura política y la reforma económica, acarreó el debilitamiento de su poder infraestructural, tal y como lo demostró la gradual pérdida de terreno del PRI en elecciones locales en este periodo. En la década siguiente la ideología institucionalizada se vio desafiada por la emergencia de valores democráticos y por reformas neoliberales que restaban énfasis al nacionalismo y prometían el fortalecimiento del Estado reduciendo su presencia en la sociedad y en la economía con el argumento de que un Estado más pequeño sería más fuerte y tendría más capacidad para promover el desarrollo.

En esta perspectiva la democratización mexicana fue un proceso cuyo objetivo era la transformación del poder despótico del Estado mediante la expansión de su poder infraestructural, esto es, de su capacidad para movilizar recursos y para proporcionar servicios con el apoyo de instituciones que coordinan sus relaciones con la sociedad: partidos políticos, asociaciones, las ramas administrativas del gobierno o el Congreso y el Poder Judicial. Todas estas instancias extenderían la presencia del Estado en la sociedad y coordinarían la representación y la participación democráticas. Sin embargo, este proceso sigue inconcluso, dada la insuficiencia de los recursos del Estado, y el deficiente desarrollo institucional que requiere la estructuración democrática de las relaciones Estado-sociedad.

En México, la capacidad que caracteriza a los estados modernos como un conjunto de instituciones centrales y radiales que penetran el territorio no se ha consolidado después de dos décadas de cambio político y económico. Asimismo, fracturas sociales profundas han obstaculizado el desarrollo de una sociedad civil cohesiva y fuerte capaz de controlar al Estado (Mann, 1993: 59). El resultado es que un proceso de democratización caracterizado por la desintegración del PRI y por la reducción del intervencionismo estatal desestabilizó las relaciones Estado-sociedad. Más todavía, la liberalización económica, la privatización y la desregulación parecen haber aumentado –o restaurado– el poder despótico del Estado, en la medida en que estas reformas fueron negociadas e implementadas gracias a acuerdos interelitistas (Loaeza, 2006a), pero en 2006 el Estado mexicano seguía siendo incapaz de cobrar impuestos, de garantizar la seguridad de las personas

ante la creciente violencia criminal o de asegurar la vigencia del Estado de derecho. La reducción del intervencionismo estatal acarreó la dispersión del poder en lugar de la redistribución del poder.

Una sociedad civil fuerte y cohesionada es una condición para el desarrollo del poder infraestructural del Estado. El deterioro del PRI alimentó grandes expectativas en relación con el desarrollo de una sociedad civil fuerte. A medida que el partido declinaba, surgían partidos de oposición relevantes y una amplia gama de asociaciones políticas y civiles que reflejaban la diversidad de la sociedad mexicana. Este desarrollo sugería que los patrones corporatistas y clientelares de las relaciones Estado-sociedad habrían de ser reemplazados por una sólida red de instituciones sociales y políticas. Sin embargo, esta posibilidad fue cancelada por la pobreza y la desigualdad, que mantienen la fragmentación y la exclusión típicas de los tiempos autoritarios. Asimismo, muchos de estos grupos y de estas organizaciones nuevas no han logrado desarrollar relaciones estables con el Estado porque se formaron en la ola opositorista de los ochenta y no han podido superar un sesgo antigubernamental, de suerte que en lugar de sostener el poder infraestructural del Estado democratizado se mantienen absortos en sí mismos y aislados, y contribuyen a la fragmentación social. Entre estas nuevas organizaciones, sólo las instituciones electorales, en particular los partidos políticos, han mostrado un potencial creíble de construcción de un nuevo tipo de poder infraestructural, hasta el punto en que se han convertido en el referente de identidades políticas emergentes, que logran efectivamente conectar a segmentos de la sociedad mexicana con el Estado.

EL DESAFÍO DE LÓPEZ OBRADOR Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El episodio populista que protagonizó Andrés Manuel López Obrador puso a prueba el naciente sistema multipartidista mexicano. Su campaña electoral –que inició desde que fue elegido jefe de gobierno de la ciudad de México en 2000– concentró toda la atención y los recursos en su liderazgo personal, y buscó polarizar a la opinión pública en torno a los antagonismos de clase, oponiendo a ricos y pobres. Esta visión simplificada del conflicto político no reconoció la diversidad de la opinión pública mexicana, las fracturas y las identidades emergentes que habían sido generadas por el proceso de democratización.

Sin embargo, en los ochenta y noventa los partidos eran los jugadores principales de la reforma política. A pesar de sus debilidades sentaron las

bases del poder infraestructural del Estado democratizado. Participaban efectivamente en importantes tareas de gobierno tales como la articulación y el manejo del conflicto. Durante el gobierno del presidente Fox asumieron las funciones de liderazgo político que en el pasado monopolizaba el presidente de la república, y definieron los patrones de cooperación política, estructurando la dinámica política en una situación transicional altamente volátil. En el periodo 2000-2006 el liderazgo de los partidos políticos causó tensiones entre ellos y la presidencia, las cuales a su vez acentuaron las contradicciones de la institución presidencial que fueron características de ese lapso. Más todavía, estas fricciones pueden explicar, por una parte, el insuficiente desarrollo institucional de los partidos, y por la otra, la debilidad de la propia presidencia de la república.

El desafío plebiscitario de López Obrador puso en cuestión los principios de la democratización mexicana, en particular el pluralismo político y el papel de los partidos, incluyendo el propio. Su estrategia y su oferta se sumaron a las versiones contemporáneas del populismo latinoamericano: una fórmula que, a diferencia de la tradicional, no buscaba reconstruir las relaciones entre el Estado y la sociedad civil con base en una alianza de clase, sino en una relación directa entre el líder plebiscitario, que centralizaba el poder y la autoridad, y el “pueblo”, en su mayoría residentes de barrios urbanos.

Al igual que otros líderes plebiscitarios, López Obrador tendía a traducir la legitimidad democrática que había obtenido en las urnas en democracia directa, apelando a la superioridad absoluta de la soberanía popular sobre cualquier otra institución. Su oferta política combinaba el pragmatismo con una ideología en la que la moral y la emoción predominaban frente a la razón (Mann, 2006: 347), y con su discurso confrontacionista asumía la misión de defender y proteger al “pueblo” de la explotación de la oligarquía y de los extranjeros, o de la corrupción de los políticos tradicionales.

El llamado de López Obrador se basaba en los patrones de la presidencia autoritaria que exacerbaban la personalización del poder que está inscrita en los regímenes presidenciales. Ejerció este tipo de liderazgo cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de México; además, esta posición fue una poderosa plataforma para proyectar su imagen presidencial y para explotar la propensión plebiscitaria de este tipo de régimen. López Obrador buscó apoyo en la creencia popular según la cual el presidente es todopoderoso y la presidencia es una fuente de coherencia política y de estabilidad para ofrecer, por una parte, la restauración del Estado como la clave del poder social y político, y, por la otra, el nacionalismo revolucionario como un factor dominante de cohesión social y como alternativa a las ideas y los valores de la democracia liberal.

En México, históricamente la relación entre izquierda y populismo ha sido ambigua y hasta antagónica; la primera estuvo en la oposición durante la mayor parte del siglo xx, pero el segundo dio a los presidentes y al PRI recursos políticos y retóricos para movilizar apoyo e implementar decisiones de gobierno (Loaeza, 2001: 373). Durante décadas el control corporativo del Estado autoritario sobre los sindicatos y las agrupaciones campesinas impidió el desarrollo de organizaciones de izquierda en lo que debía haber sido su medio natural. Las que aparecían eran cooptadas o reprimidas o condenadas a la dispersión y al aislamiento. La fractura del PRI y el proceso de democratización parecieron poner fin a este patrón y conducir a la reconciliación de estas dos corrientes. Esta evolución también se vio favorecida por la transformación gradual de las organizaciones de izquierda radical hacia el reformismo electoral y su renuncia a la “legitimidad revolucionaria” y a la lucha armada (Hirales, 2005). Sobre esta base el PRD se desarrolló como una organización autónoma y se convirtió en el partido emblemático de la izquierda.

El partido se fundó en defensa del proyecto original de la Revolución mexicana en contra de la alternativa neoliberal en ascenso, “...en torno a la personalidad de [Cuauhtémoc] Cárdenas...” (Bruhn, 1998: 119), y acogió a una gama de organizaciones minoritarias de izquierda que incluía a priistas descontentos, antiguos guerrilleros, comunistas, socialistas, maoístas, trotskistas y una variedad de activistas políticos y líderes de movimientos sociales (Valdés, 1994). Después de más de 18 años de existencia el partido sigue siendo una coalición precaria de corrientes muy consolidadas, o tribus, que son presa de continuas luchas intestinas causadas por diferencias de opinión en relación con la estructura del partido, su programa o recursos gubernamentales. Estas disputas alimentan la imagen pública del PRD como un actor ríjoso, desconfiable e inestable (Woldenberg, 1997; Eisentadt, 2004; Prud’homme, 2005).

Tres son los rasgos distintivos del PRD: diversidad interna, personalización del liderazgo, y los vínculos con el PRI, sus miembros, su ideología y sus redes. Todos ellos fueron magnificados por López Obrador, primero, como líder del partido (1996-1999) y, después, como jefe de gobierno de la ciudad de México (2000-2006). En términos del perfil y de las perspectivas de la izquierda mexicana, la característica más significativa es la diversidad original que se prolongó y acentuó en virtud de estrategias de crecimiento consistentes en una política de “puertas abiertas” y de alianzas misceláneas. Después de la derrota del PRI en la elección presidencial de 2000, un número creciente de sus militantes y líderes se refugiaron en el PRD (Reveles, 2004: 49). Este flujo alteró los equilibrios internos, enajenó a individuos y a organizaciones de izquierda, acentuó las tensiones en su seno y desembocó

en la construcción de una hegemonía de ex priistas en el partido. Sin embargo, la recepción de antiguos priistas facilitó la penetración territorial del partido porque en muchos casos llegaron con sus propias clientelas y organizaciones que habían quedado en el desempleo por la debacle del PRI.

Gracias a esta estrategia la presencia electoral del PRD creció en dimensiones sin precedentes. La fuerza potencial del partido recibió un impulso decisivo en 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue elegido jefe de gobierno de la capital de la república, la ciudad más grande y más rica del país, que cuenta con recursos políticos muy importantes en virtud de sus altos niveles de integración social, resultado de sólidas tradiciones asociativas. En 2000 el PRD ganó las elecciones en la cámara local, la Asamblea de Representantes. Desde entonces, el partido ha mantenido una posición de predominio absoluto en la ciudad que le ha permitido extender su influencia y su capacidad de organización a través de redes clientelares y prácticas patrimoniales. Así, unos cuantos sindicatos, pero sobre todo vendedores ambulantes, paracaidistas, colonos y taxistas ilegales, que en el pasado gravitaban en torno al PRI o estaban vinculados a ese partido, transfirieron sus lealtades al PRD y se convirtieron en la base de poder de López Obrador (Bartra, 2006). No es de sorprender que en la elección presidencial la capital de la república mostrara la mayor concentración de perredistas en el país, y tampoco que en el verano de ese año estas organizaciones asumieran el mayor peso de la protesta poselectoral; sus miembros asistían con regularidad a los mítines y manifestaciones, al igual que los empleados del gobierno local, conforme a los patrones del sistema de castigos y recompensas típicos de la política de maquinaria.⁹

Primero como presidente del PRD y después como jefe de gobierno, y por último como candidato a la presidencia de la república, para apoyar sus decisiones y presionar al Congreso o al gobierno federal, López Obrador movilizó a estas organizaciones clientelares en manifestaciones y bloqueos callejeros que se convirtieron en el sello distintivo de la capital de la república. Estas organizaciones fueron cruciales para la construcción del liderazgo personal de AMLO porque lo liberaron de las restricciones partidistas, pero fueron sobre todo clave en la expansión de su influencia más allá del PRD. La relación directa entre el líder y estos intereses organizados –la mayor parte de ellos participantes de la economía informal– era altamente volátil y no contribuyó al desarrollo de una sociedad civil fuer-

⁹ Estos intercambios fueron concluidos posteriormente. Por ejemplo, en diciembre de 2006 la prensa reportó las quejas de los taxistas irregulares contra el gobierno de la ciudad porque no habían recibido los permisos que se les había prometido, aun cuando habían participado activamente en la protesta poselectoral. Otros grupos estaban esperando las casas que les habían ofrecido. Véase Illich Valdez, "Cobran piratas apoyo a Ebrad", *Reforma*, 12/23/2006.

te, en la medida en que reproducía el control patrimonialista y paternalista del pasado.

Siguiendo su preferencia por las organizaciones extrapartidistas, López Obrador fomentó la creación de asociaciones fuera del PRD para apoyar sus aspiraciones presidenciales. En diciembre de 2004 un grupo de simpatizantes anunció el establecimiento de un comité promotor de “Redes ciudadanas”, una organización independiente del PRD, que movilizaría el apoyo a López Obrador. Antiguos líderes del PRI tenían a su cargo estas redes. En abril de 2005 los lopezobradoristas afirmaban contar con 13 000 comités en todo el país en cerca de 5 000 secciones electorales, de 5 535 (Lajous, 2006: 216-217).

El gobierno de la ciudad de México fue una plataforma muy efectiva para que López Obrador alcanzara popularidad nacional a través de una campaña de promoción de los trabajos públicos y los programas de asistencia –por ejemplo, una pensión mensual a las personas de la tercera edad– de su gobierno, así como de la creación de una universidad con requisitos mínimos de admisión. En 2006 muchos mexicanos en todo el país pensaban que el gobierno de la capital era un modelo que debía reproducirse a nivel nacional. Gracias al poder que acumuló en la ciudad de México López Obrador logró afianzar su control sobre el PRD. Este desarrollo se vio favorecido por la inestabilidad inherente a una fórmula que reunía intereses y fuerzas tan heterogéneas en el partido. Sin embargo, dicha evolución produjo grandes tensiones dentro de la organización, sobre todo entre las muchas corrientes que se identificaban con la izquierda (Gilly, 2005). No obstante, todas las objeciones eran superadas por la habilidad del líder para movilizar apoyo popular.

A lo largo de 2005 las encuestas indicaban que López Obrador era el político más popular del país. En mayo tenía una preferencia de voto de 43%;¹⁰ en contraste el PRD tenía únicamente 18% de las preferencias electorales (Consulta Mitofsky, 2005). La brecha entre el líder y el partido se redujo en la elección presidencial; para entonces la fusión entre el partido y el líder era completa. La creciente identificación de López Obrador benefició al PRD que obtuvo un número de curules en la Cámara sin preceden-

¹⁰ La presencia predominante de López Obrador benefició al PRD. Su desarrollo institucional perdió impulso pero el partido tuvo un buen desempeño electoral en el nivel local y nacional. La popularidad de López Obrador protegió al PRD de los escándalos de corrupción que en abril de 2004 amenazaron su posición hegemónica en la ciudad de México. En 2000 el partido formó una Alianza por México cuyos candidatos a la Cámara de Diputados obtuvieron casi siete millones de votos; en las elecciones federales de 2003 los candidatos del PRD recibieron 4.7 millones de votos. Esta cifra se triplicó tres años después cuando los candidatos de la CPBT obtuvieron 12 millones de votos.

tes; no obstante, en la movilización de protesta poselectoral AMLO fue absorbido por su propia defensa. Por estas razones su discurso fue crecientemente egocéntrico. En septiembre muchos de los rasgos del PRD eran el reflejo especular del liderazgo de López Obrador, de su proclividad al radicalismo y a la intransigencia, y de sus ambivalencias hacia la democracia representativa y el Estado de derecho. Como ocurre cuando un líder se apodera de un movimiento, este desarrollo puede favorecer un compromiso altamente emocional entre sus seguidores, pero crea una identidad inestable. Así, el potencial del partido para conectarse con la sociedad se disolvió; la protesta poselectoral lo precipitó en una suerte de ensimismamiento y, por esta vía, al aislamiento.

LA ELECCIÓN POSELECTORAL DE 2006 Y EL AISLAMIENTO DE LA IZQUIERDA

Las victorias de la CPBT en el Congreso y en el gobierno de la ciudad de México se vieron eclipsadas por la derrota de su candidato presidencial y por su rechazo a los resultados oficiales. La protesta poselectoral fue un despliegue de la vitalidad y profundidad de las tradiciones populistas en segmentos de las clases medias y de las clases bajas. La prominencia de López Obrador se vio exacerbada durante la movilización poselectoral por la naturaleza misma de la protesta; sin embargo, y contrariamente a lo esperado, en lugar de extender el alcance de la influencia del líder a segmentos más amplios de la sociedad, el movimiento enajenó el apoyo de una corriente significativa de la opinión pública y también intensificó los antagonismos políticos. La movilización puso igualmente al descubierto las diferencias irreconciliables entre el populismo y la democracia liberal.

La estrategia de movilización, las marchas, los mítines masivos, las asambleas populares y los plantones en el centro de la ciudad, los bloqueos callejeros, además de las prácticas plebiscitarias y la retórica confrontacionista de AMLO, generaron tensiones importantes en un proceso político que estaba todavía inmerso en la construcción de instituciones. Las tácticas extrainstitucionales también provocaron tensiones en el interior de la coalición y del mismo PRD que fueron hechos a un lado por el líder. Su defensa exigía un compromiso y lealtad totales, aun cuando estas exigencias contrariaran los intereses y los objetivos de los partidos de la coalición cuyos representantes en el Congreso habían asumido sus responsabilidades normales. El gobierno de la ciudad se vio entrampado entre las demandas de la población y la creciente intransigencia de los lopezobradoristas que secuestraron el centro de la ciudad para enfrentarse al gobierno de Vicente Fox.

A lo largo de la campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador hizo numerosas declaraciones que sugerían que él y sus seguidores únicamente reconocerían los resultados que confirmaran una victoria que creían asegurada. De suerte que a muy pocos sorprendió que en la noche del día de la elección, cuando empezó a filtrarse información de los partidos según la cual las encuestas de salida indicaban que la diferencia entre los candidatos del PAN y de la CPBT era muy cerrada, los lopezobradoristas cuestionaran los números. El 3 de julio López Obrador denunció en cadena nacional de televisión que tres millones de votos habían “desaparecido”. Esta afirmación fue desmentida por la explicación de las autoridades electorales de que todos los partidos políticos habían acordado en febrero que las actas de casilla que mostraran inconsistencias, esto es, errores aritméticos y de otra naturaleza, se mandarían directamente a un archivo especial para revisión antes de incorporarlas al recuento nacional.¹¹

Sin embargo, esta clarificación crucial fue hecha 24 horas después del anuncio de López Obrador y no pudo contrarrestar su efecto devastador sobre la credibilidad de todo el proceso en la mente de muchos lopezobradoristas. Las acusaciones de “manipulación” del voto presidencial y de fraude se basaban más en prejuicios y en experiencias pasadas que en evidencia concreta, y removieron la profunda desconfianza hacia las instituciones del poder judicial. Más todavía, estas acusaciones únicamente reforzaron la identidad perredista que incluye un pronunciado prejuicio contra los procedimientos de la democracia electoral.¹²

Dos semanas después de la elección López Obrador organizó un mitin en el Zócalo para protestar contra los primeros resultados oficiales e informar al pueblo de “los nuevos descubrimientos” y de las prácticas fraudulentas detrás de la “elección robada”. Hasta septiembre, reuniones similares se realizaron una vez a la semana. A lo largo del periodo poselectoral los lopezobradoristas exigían el recuento de los 41 millones de votos que habían sido emitidos. “Voto por voto, casilla por casilla”. Su reclamación minimizaba las restricciones legales y las implicaciones de una demanda que podía

¹¹ Los errores más frecuentes en las actas consistieron en espacios vacíos. El recuento de votos fue responsabilidad de más de un millón de mexicanos, escogidos por sorteo, y muchos de ellos en lugar de inscribir un cero cuando un partido no obtuvo ningún voto dejaron el espacio vacío. El programa de cómputo registraba como “inconsistencia” esta respuesta. La mayor parte de estos errores afectó a los partidos pequeños: PASC y PANAL.

¹² El autor de un estudio sobre actitudes e ideología del PRD concluye, luego de analizar las encuestas de tres legislaturas sucesivas, que los miembros del PRD mostraron los niveles más bajos de confianza en estas instituciones en relación con otros partidos. Estos resultados indican que la desconfianza hacia las instituciones de la democracia liberal es un componente importante de la identidad perredista. Véase Igor Vivero, (2006: 185-186).

conducir a la anulación de todo el proceso. Si las autoridades electorales hubieran cedido a la presión, los procedimientos electorales normales habrían sido interrumpidos y sustituidos por negociaciones e intercambios políticos. El objetivo último de los lopezobradoristas era que el Congreso –donde representaban la segunda fuerza– nombrara un gobierno provisional cuya tarea sería la organización de una nueva elección.

El 30 de julio, en un mitin al que asistieron cientos de miles de sus seguidores, AMLO convocó a la desobediencia civil para forzar el reconocimiento de su triunfo como presidente. Así se inició el bloqueo de la ciudad de México. Esta movilización consistió en la instalación de tiendas de campaña y de grandes pabellones a lo largo del Paseo de la Reforma y de las calles que conducen al Zócalo –la plaza histórica que simboliza la sede del poder– para bloquear la circulación. El PRD movilizó a sus redes, en particular a organizaciones de taxis ilegales, a los ciudadanos de la tercera edad que se habían beneficiado de los programas de asistencia del gobierno lopezobradorista. Sin embargo, el número de personas que participó en el bloqueo fue disminuyendo con el paso del tiempo; por momentos las tiendas de campaña estaban vacías. Esta acción duró 47 días y afectó áreas de intensa actividad turística, comercial y financiera de la capital de la república.

Pese a que personas de todo el país viajaron a la ciudad de México para participar en actos que requerían amplias y contundentes muestras de protesta, en particular los mítines que se realizaron en fechas simbólicas como el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, la movilización fue esencialmente un asunto local. El bloqueo perjudicó a miles de habitantes de la ciudad y produjo gran irritación contra su gobierno perredista. La estrategia de movilización causó una ruptura entre López Obrador y muchos de sus simpatizantes originales; tuvo un efecto divisivo entre la población y el gobierno locales, y éste quedó atrapado entre su lealtad al lopezobradorismo y las quejas y demandas cotidianas de diferentes grupos que exigían a las autoridades que aplicaran las disposiciones legales contra un bloqueo que estaba en clara violación de la ley.

La polarización que López Obrador evocaba durante la campaña presidencial se materializó en el verano de 2006. Sin embargo, este antagonismo no era un reflejo de diferencias socioeconómicas, es decir, no era la oposición entre ricos y pobres que López Obrador buscaba galvanizar en sus discursos, sino una fractura que se generó entre quienes rechazaban los métodos de protesta y apoyaban a las autoridades electorales y al gobierno, y quienes cuestionaban su desempeño pero terminaron por poner en tela de juicio su relevancia, y estaban de acuerdo con la estrategia de protesta como un recurso radical que se justificaba por lo que consideraban la magnitud del fraude cometido por la “oligarquía”.

El rechazo a los resultados oficiales tenía implicaciones muy significativas para el patrón emergente de relaciones Estado-sociedad porque las instituciones electorales tienen un papel prominente en la reestructuración de estas relaciones. La credibilidad electoral en México fue trabajosamente construida en los años noventa, en un proceso de reformas sucesivas en el que participaron todas las fuerzas políticas para poner fin a una larga historia de prácticas electorales fraudulentas y de mayorías fabricadas.

En 1996 la organización de las elecciones pasó a ser responsabilidad de una autoridad profesionalizada, el IFE. Los miembros de su consejo ejecutivo son propuestos y seleccionados por todos los partidos. La transparencia de los procesos se apoya en el involucramiento de ciudadanos comunes y corrientes. En los comicios del 2 de julio casi un millón de ciudadanos, elegidos al azar entre los residentes de los distritos electorales, estuvieron a cargo de las 130 000 casillas en todo el país. El sistema electoral incluye una red de instituciones que extiende la presencia del Estado a través del territorio nacional; es un vehículo de poder infraestructural, asociado a valores e ideas democráticas. Uno de los logros del sistema es que incorpora casi al cien por ciento de los mayores de edad (18 años). El hecho de que la credencial para votar sea hoy un documento de identidad personal universalmente aceptado como tal es prueba del papel ampliado de las instituciones electorales en el poder infraestructural emergente del Estado.

El sistema electoral fue diseñado a prueba de fraudes y con el tiempo ha ganado prestigio nacional e internacional. Muchos mexicanos creían que había funcionado en forma apropiada el 2 de julio y descartaban las acusaciones lopezobradoristas de fraude que se basaban en evidencia contradictoria e insuficiente. En este contexto, el ataque de AMLO contra el IFE, la institución emblemática de la democratización, provocó una poderosa reacción negativa incluso entre muchos que no eran seguidores del PAN.

Las diferencias entre quienes defendían el proceso institucional y quienes deseaban detenerlo para modificar su previsible resultado se profundizaron por la estrategia que siguió el presidente Fox, consistente en aferrarse a las reglas y normas establecidas y a los principios democráticos. El presidente insistía en la necesidad de dejar en manos de la autoridad electoral y del gobierno local la responsabilidad de enfrentar la situación, pese a su efecto corrosivo sobre la atmósfera política del país. Por ineficaz o pasivo que pareciera su comportamiento, la estrategia del presidente correspondía a una posición de respeto más o menos extendido hacia los procesos institucionales. Las encuestas de opinión muestran que las tasas de aprobación del presidente Fox pasaron de 49% en junio a 60% en septiembre (Bimsa, 2006). En cambio, la imagen pública de López Obrador y del PRD se vio severamente perjudicada por el desafío a las instituciones estableci-

das. A la pregunta “¿Si la elección presidencial fuera hoy, por quién votaría usted?”, sólo 28% eligió a López Obrador. Más revelador de los costos de la movilización para el PRD fue el incremento del porcentaje de personas que dijeron que nunca votarían por ese partido: la proporción pasó de 21% en junio a 31% en septiembre (Bimsa, 2006).

El rechazo de los perredistas a los resultados oficiales se convirtió en un reto a la autoridad del Estado, tal y como lo expresó López Obrador en varias oportunidades cuando desdeñosamente descartó *sus instituciones*. Al separar de esta manera a su movimiento del marco institucional vigente, López Obrador empezó a desplazarse hacia el exterior de la arena política para entrar en el universo limitado de sus asesores personales. Conforme pasaban las semanas y el proceso institucional continuaba, a pesar de la presión en las calles y de las acciones de los representantes de la coalición en el Congreso, López Obrador se impacientaba, y terminó por adoptar un discurso radical dominado por una encendida retórica, cuyo tema era la lucha de clases –que incluso el PRD había abandonado años atrás–, y por la denuncia contra los ricos que querían detener al candidato de los pobres. El resultado inmediato de esta radicalización fue una mayor distancia entre los lopezobradoristas y la opinión pública. Así, la protesta poselectoral no logró impulsar una insurrección civil como la que precipitó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003.

El 16 de septiembre marca una fecha importante en el distanciamiento de López Obrador y su movimiento del proceso político general, cuando, al levantar el bloqueo de la ciudad de México, los delegados de la Convención Nacional Democrática lo designaron “presidente legítimo” a mano alzada en una asamblea popular en el Zócalo a la que asistieron cerca de 350 mil personas. AMLO protestó “oficialmente” como presidente de la república el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución mexicana, y anunció la formación de un gobierno paralelo así como la continuación del movimiento de resistencia civil. Mientras tanto el proceso institucional siguió adelante según las normas constitucionales y Felipe Calderón tomó posesión el 1º de diciembre.

CONCLUSIONES

El movimiento lopezobradorista muestra una sorprendente continuidad en la relación histórica entre la izquierda y el populismo: la primera se mantuvo subordinada al segundo con base en las tradiciones de la Revolución mexicana, muchas de ellas no democráticas. Éstas incluyen la ideología –el nacionalismo revolucionario–, las formas clientelares de organización y

el patrimonialismo. No obstante, el mérito de López Obrador fue haber reconocido la debilidad central de la democracia mexicana en la insuficiencia del poder infraestructural del Estado.

En el verano de 2006 en México se perfiló la oposición entre dos fórmulas distintas de estructuración de las relaciones entre Estado y sociedad. Este desacuerdo puede ser inevitable cuando estas relaciones están en transición. El movimiento lopezobradorista representaba la reconstrucción del patrón paternalista de la relación Estado-sociedad que rompieron las reformas neoliberales y la democratización, mientras que los opositores sostenían una solución democrática liberal. En la medida en que la alternativa de AMLO estaba vinculada a un partido político, o peor todavía, a un líder, era un patrón insostenible, tan parcial y divisivo como pudo haber sido el PRI. Más todavía, los vínculos entre esta fórmula y el pasado autoritario eran fácilmente reconocibles para segmentos de la opinión pública mexicana, ideológicamente diversos pero identificados con las instituciones democráticas.

La movilización poselectoral dañó el emergente poder infraestructural del Estado democrático pero no lo destruyó. Durante el verano todos los partidos políticos y las autoridades electorales se concentraron en sus disputas, de tal manera que la elección presidencial se convirtió en un debate privado del cual el resto del país era apenas un testigo. Por eso la experiencia exhibió las limitaciones de una noción de democracia que es sólo un método asociado con valores de libertad, que no ofrece la ideología inmanente que se requiere para movilizar a la sociedad en un combate ambicioso y urgente contra la pobreza y la desigualdad.

Paradójicamente, el estado de politización sin precedentes que produjeron los debates poselectorales alcanzó a amplios segmentos de la sociedad. Este involucramiento era en sí mismo una conexión entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, a pesar del éxito último de los procedimientos institucionales sobre las movilizaciones populistas, en México el desarrollo de un poder infraestructural sólido del Estado sigue siendo un desafío para la estabilización de la democracia. La elección presidencial también demostró que el nacionalismo es todavía un recurso político poderoso y vital que puede utilizarse para crear una visión de largo plazo, una utopía que podría reunir a todas las fuerzas políticas para reforzar el emergente poder infraestructural del Estado. En la sesión del Congreso del 1º de diciembre de 2006, los golpes, gritos e insultos entre los diputados y senadores de distintos partidos, que amenazaban con impedir la ceremonia, se detuvieron de inmediato cuando se escucharon las primeras notas del himno nacional y todos los partidos lo entonaron a un tiempo respetuosamente. Esta emoción puede compensar el insuficiente desarrollo institucional y sostener una democracia que es tan frágil como débiles son el Estado y la sociedad civil.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial (2006), *Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos*, Washington, D.C., The World Bank.
- Bartra, Roger (2006), "Fango sobre la democracia", *Letras Libres*, año VIII, núm. 93, septiembre.
- Bimsa (2006), Encuesta de Opinión Pública Nacional, septiembre.
- Boullosa, Carmen (2005), "Guilty of Popularity", *The New York Times*, 19 de abril.
- Bruhn, Kathleen (1998), "The Partido de la Revolución Democrática: Diverging Approaches to Competition", en Mónica Serrano (ed.), *Governing Mexico: Political Parties and Elections*, Londres, The Institute of Latin American Studies.
- Castañeda, Jorge G. (2006), "Latin America's Left Turn", *Foreign Affairs*, mayo-junio.
- Centeno, Miguel Ángel (2002), *Blood and Debt. War and Nation State in Latin America*, University Park, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press.
- Consulta Mitofsky (2005), *Así van; todos rumbo al 2006. Tendencias electorales*, mayo, www.consulta.com.mx 14/09/06.
- (2006a), *Evaluación de gobierno del presidente Fox*, agosto, www.consulta.com.mx 10/09/06.
- (2006b), *Así van... Rumbo al 2 de julio de 2006*, abril, www.consulta.com.mx 10/09/06.
- Eisenstadt, Todd A. (2004), *Courting Democracy in Mexico: Party Strategies and Electoral Institutions*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Gilly, Adolfo (2005), "Definiciones", *Nexos*, vol. XXVII, núm. 336, diciembre.
- Grandin, Greg (2006), "Latin America's New Consensus", *The Nation*, www.thenation.com, 9/10/06.
- Hirales, Gustavo (2005), "La izquierda frente al espejo de la ley (y la democracia)", *Nexos*, núm. 336.
- Lajous, Alejandra (2006), *AMLO: entre la atracción y el temor*, México, Océano.
- Latinobarómetro (2003), www.latinobarometro.org, 04/04.
- Loaeza, Soledad (2001), "La presencia populista en México", en Guy Hermet, Soledad Loaeza, Jean François Prud'homme, *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, México, El Colegio de México.
- (2006a), "Problems of Political Consolidation in Mexico", en Laura Randall (ed.), *Changing Structure of Mexico. Political, Social, and Economic Prospects*, Nueva York, M. E. Sharpe.
- (2006b), "Vicente Fox's Presidential Style and the New Mexican Presidency", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 22, núm. 1, invierno.
- López Obrador, Andrés Manuel (2006), "Proyecto alternativo de nación", www.prd.org.mx, 12/30/2006.
- Mann, Michael (1993), *The Sources of Social Power. The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (2002), "The Crisis of the Latin American Nation-State", trabajo presentado en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 10-13 de abril.
- (2006), "The Sources of Social Power Revisited: A Response to Criticism",

- en John A. Hall y Ralph Schroeder (eds.), *An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 343-396.
- Ortega Martínez, Jesús (2005), "Participación ciudadana permanente", *Nexos*, vol. XXVII, núm. 336, diciembre.
- Ortiz Fragoso, Onel (2005), "IX Congreso Nacional del PRD: mucho trabajo pendiente", www.prd.org.mx 10/18/2006.
- Palmer, David Scott (2000), "Democracy and Its Discontents in Fujimori's Peru", *Current History*, febrero.
- Paramio, Ludolfo (2006), "La izquierda y el populismo", *Nexos*, vol. XXVIII, núm. 339, marzo.
- Prud'homme, Jean François (2004-2005), "Le Parti de la Révolution Démocratique: une institutionnalisation difficile", *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 54, otoño.
- Reveles Vázquez, Francisco (2004), "Fundación e institucionalización del PRD: liderazgos, fracciones y confrontaciones", en Francisco Reveles Vázquez (coord.), *Partido de la Revolución Democrática. Los problemas de la institucionalización*, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Gernika.
- Roberts, Kenneth M., (2003) "Social Correlates of Party System Demise and Populist Resurgence in Venezuela", *Latin American Politics and Society*, vol. 45, núm. 3, otoño.
- Sharef, Eleonora (2005), "Scrutinizing Democracy in Latin America", *Inter American Dialogue*, www.democracia.unpd.org, 10/08/06.
- Tanaka, Martín (2004-2005), "Révolutionnaires, réformistes ou 'hommes politiques traditionnels'? Montée en puissance de la gauche au Pérou", *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 54, otoño.
- Valdés, Leonardo (1994), "Partido de la Revolución Democrática: The Third Option in Mexico", en Neil Harvey y Mónica Serrano (eds.), *Party Politics in An Uncommon Democracy: Political Parties and Elections in Mexico*, Londres, The Institute of Latin American Studies.
- Valenzuela, Arturo (2004), "Latin American Presidencies Interrupted", *Journal of Democracy*, vol. 15, num. 4, octubre.
- Vivero, Igor (2006), *Desafiando al sistema. La izquierda política en México. Evolución organizativa, ideológica y electoral del Partido de la Revolución Democrática (1989-2005)*, México, Editorial Porrúa.
- Woldenberg, José (1997), "The Future of the Mexican Left", en Mónica Serrano (ed.), *Mexico: Assessing Neo-Liberal Reform*, Londres, The Institute of Latin American Studies.